

Antoni Furió, catedrático de historia medieval en la Universidad de Valencia, es actualmente Academic Visitor en la Universidad de Oxford. Autor de diversos libros de su especialidad (entre ellos *El rey conquistador: Jaime I entre la historia y la leyenda*, 2007) y de la *tesis Història del País Valencià (1995)*, es director de la revista *L'Espill* y durante trece años (1997-2010) ha estado al frente de las *Publicacions de la Universitat de València*.

El futuro de la universidad

Antoni Furió

La prensa británica se hace eco estos días de la magnitud y virulencia de la manifestación estudiantil del pasado 10 de noviembre contra los planes del gobierno de coalición de reducir sensiblemente la inversión en la educación superior y, al mismo tiempo, incrementar considerablemente las tasas de matrícula. Tales planes contemplan una reducción del 40% en el presupuesto destinado a las universidades, que bajará de los 8.500 millones de euros actuales a unos 5.000 millones, mientras que la matrícula podrá subir de las 3.290 libras (unos 4.000 euros) que cuesta ahora a 9.000 (unos 10.800 euros). Cursar un grado de tres años podrá costar, sólo en tasas de matrícula, unos 32.400 euros, casi el triple de lo que cuesta ahora y una cantidad que muchos estudiantes no podrán permitirse. Con ambas medidas el gobierno británico no sólo pretende transferir los costes de la enseñanza superior del Estado a los propios estudiantes, sino que asesta un duro golpe a la idea misma de la educación superior como un bien público. La educación es un bien valioso, sí, pero no tanto socialmente como individualmente, porque permite acceder a profesiones muy bien remuneradas y, por eso, hay que pagar, y hay que pagar mucho, por obtenerlo.

Las previsiones del gobierno siguen en gran medida las recomendaciones del informe Browne¹, que reflejan una concepción más «económica» o «empresarial» que «política» de la universidad, cuya rentabilidad se mide más en términos económicos que sociales y culturales. El informe, en efecto, pone todo el acento en la dimensión económica: «la enseñanza superior importa porque estimula la innovación y la transformación económica», «porque contribuye al crecimiento económico, que a su vez contribuye a la prosperidad nacional». Y, sobre todo, «la enseñanza superior importa porque transforma la vida de los individuos (*individuals*). Al graduarse, es mucho más probable que los graduados encuentren empleo, mucho más probable que obtengan salarios altos y una mejor satisfacción en su trabajo y mucho más probable que encuentren más fácil pasar de un trabajo a otro».² En cambio, como subraya Stefan Collini en un análisis de urgencia para la *London Review of Books*, el informe no muestra una preocupación real por las universidades como lugares de educación, sino que son concebidas más bien como simples motores de la prosperidad económica y como agencias de formación para futuros empleados con salarios de gama alta.³

Por ello lo preocupante, como bien saben los estudiantes que han salido a la calle y los profesores que les apoyan y se muestran críticos con las medidas del gobierno, no es sólo el aumento de las tasas de matrícula o los recortes presupuestarios previstos, sino sobre todo la idea de universidad que se desprende de ellas y que anima todo el informe Browne. Como ha sabido ver muy bien Collini, el informe nos sugiere que, más que pensar en la educación superior como un bien público financiado con fondos públicos, deberíamos pensar en un mercado regulado en el que la demanda del consumidor (en este caso, la elección del estudiante) determina la oferta de los proveedores de servicios (en este caso, las universidades). El informe contempla a las universidades luchando por atraer clientes

1. *Securing a sustainable future for higher education. An independent review of higher education funding and student finance*, informe hecho público el 12 de octubre de 2010 y disponible online en: <http://hereview.independent.gov.uk/hereview/report/> Lord Browne fue presidente de BP (British Petroleum) hasta su dimisión en 2007.

2. Las citas entrecorridas, incluido el énfasis en el «mucho más probable», son extractos literales del informe Browne.

3. Stefan Collini, «Browne's Gamble», *London Review of Books*, vol. 32, núm. 21 (4 de noviembre de 2010), págs. 23-25. Accesible online: <http://www.lrb.co.uk/v32/n21/stefan-collini/brownes-gamble>. Stefan Collini es profesor de inglés en la Universidad de Cambridge.

(o consumidores) en un mercado competitivo, en el que la financiación pública es sustituida por las aportaciones de los clientes (o consumidores), cuyas elecciones son también las que determinan qué y cómo se enseña, y sólo se mantienen una cierta cantidad de ayudas públicas (becas) para los consumidores con bajo poder adquisitivo (estudiantes sin empleo o con salarios bajos). En definitiva, un sistema en el que las universidades son proveedores de servicios, los estudiantes los consumidores (racionales) de estos servicios y el estado actúa como regulador. Bajo todo ello subyace la premisa de que «los estudiantes están mejor situados para juzgar lo que quieren obtener de la educación superior», que la medida de la calidad es la «satisfacción del estudiante» y que, por tanto, la mayor contribución económica del estudiante se corresponde con –y está justificada por– el mayor salario que recibirán en el mundo laboral gracias a su mejor cualificación profesional, mientras que la competencia por los estudiantes llevará a las universidades a mejorar la calidad de su enseñanza. Si lo consiguen obtendrán más estudiantes y con ellos más fondos, y si no, perderán estudiantes, perderán recursos y peligrará su misma existencia.

No hace falta decir que, entre las numerosas víctimas del nuevo sistema que se nos viene encima, se encuentran –además de la idea misma de la educación como servicio público, de la misión social y cultural de las universidades y de los grupos más desfavorecidos de la población– las humanidades, que no sólo son el objetivo preferente de los recortes presupuestarios –el gobierno británico ya ha advertido que los recortes serán menores en el ámbito de las ciencias y la tecnología–, sino las que ofrecen una salida profesional más incierta o menos rumbosa para sus estudiantes. Si el futuro de las humanidades dependiera únicamente de los beneficios esperables en términos estrictos de futuros salarios altos, muchas facultades acabarían cerrando. Pero quizá también algunas de las de ciencias. El conocimiento científico, como la educación en sí misma, no está tan valorado social y económicamente como el conocimiento técnico y aplicado, como la cualificación profesional, que es a lo que algunos piensan que se reduce –o debería reducirse– la universidad. Entre estos algunos se cuentan muchos empresarios –que no conciben a la universidad sino en su relación con el mercado laboral–⁴, pero también, cada vez más, muchos gobiernos e incluso responsables académicos.

Por otra parte, en su intento de justificar las medidas previstas, algunos miembros de la coalición gobernante han afirmado que el incremento de las tasas de matrícula es la única manera de asegurar que las grandes universidades continúen siendo públicas, que los costes de funcionamiento son tan elevados que algunas de estas universidades (Oxford, Cambridge, London School of Economics, University College London, las joyas de la corona del sistema universitario británico) están considerando su privatización y que, por tanto, sin este incremento, el gobierno no podría garantizar el futuro de las universidades y su carácter público.⁵ El problema es que, recortando sustancialmente los fondos públicos y descargando sobre las propias universidades el peso de su financiación, se obliga a éstas a avanzar por la vía de la mercantilización –la conversión del «saber académico», de la enseñanza superior y la producción científica en una mercancía–, que al fin y al cabo no es muy distinta de la privatización.

La manifestación estudiantil ante la sede del Partido Conservador en Londres no se puede reducir a una simple algarada, como han hecho la policía y el gobierno, y una parte

4. En sus críticas a los sucesivos gobiernos progresistas de la Universidad de Valencia, algunos dirigentes de las asociaciones empresariales valencianas acusaban a los profesores universitarios de pasarse el día mirando a las estrellas (astronomía) o perdiendo el tiempo en cuestiones filológicas (política lingüística), en vez de dedicarse a formar empresarios y trabajadores cualificados y contribuir así a la generación de riqueza y a la prosperidad económica del país. Eran los buenos tiempos del boom de la construcción y de la burbuja inmobiliaria.

5. Declaraciones del ministro de Empresa y Comercio del gobierno británico, Vince Cable, recogidas por la BBC, «Fees keep universities public», *BBC news. Education & family*, 15 de noviembre de 2010. Disponibles online en <http://www.bbc.co.uk/news/education-11762430>.

6. Aunque algunos crean ver el origen de todos los males, incluida la privatización y la mercantilización de la universidad, en los acuerdos de Bolonia, el problema no está tanto ahí, en el marco genérico que se esboza en ellos, como en su implantación —decidida por comisiones «tecnocráticas», con poco debate en la comunidad universitaria y con prisas. Por otra parte, la privatización y mercantilización de la educación superior es una amenaza que pende sobre la universidad, con o sin Bolonia, como podemos advertir en el caso de Estados Unidos.

7. Y también donde surgieron las primeras críticas a lo que algunos han dado en llamar «capitalismo académico» en el nuevo modelo de economía basado en el conocimiento. Cf. S. Slaughter y G. Rhoades, *Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1997; y de los mismos autores, *Academic Capitalism in the New Economy*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2004; B. R. Clark, *Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation*, Oxford, IAU Press y Pergamon, 1998; B. Johnson, P. Kabanagh y K. Mattson, eds. *Stal This University: The Rise of the Corporate University and the Academic Labor Movement*, Nueva York, Routledge, 2003; y D. Bok, *Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education*, Princeton, N.J., Princeton University Press, 2003 (traducido al castellano por Publicacions de la Universitat de València, 2010).

8. Antonio Gramsci, *La formación de los intelectuales*, México, Grijalbo, 1967; Tony Judt, «Meritocrats», *The New York Review of Books*, 19 de agosto de 2010, artículo accesible online: <http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/aug/19/meritocrats/>.

de la prensa afín, ni se puede explicar como una mera reacción encolerizada a la anunciada subida de las tasas de matrícula, aunque haya sido éste el detonante inmediato de las movilizaciones. Como tampoco el malestar por la situación actual de las universidades y la inquietud por el futuro que les espera se limitan sólo a Gran Bretaña. En otros países europeos se ha producido igualmente una fuerte contestación a los planes de reforma de la educación superior, sobre todo a raíz de la implantación del llamado Plan o Proceso de Bolonia, tan bienintencionado como mal explicado y peor aplicado,⁶ y que pretende conciliar la tradición académica alemana y francesa, de una universidad con un fuerte carácter público e institucional, con el modelo empresarial o mercantil que se ha desarrollado en los últimos años en el mundo anglosajón, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde primero se empezó a hablar de privatizar la educación superior y mercantilizar la universidad.⁷

Las airadas protestas de los estudiantes británicos se explican también, en parte, por la falta de sensibilidad de un gobierno que cuenta con dieciocho millonarios en su gabinete y parece empeñado en dismantelar a toda costa los logros del Estado del bienestar. La reducción del gasto público supone, ante todo, la reducción del gasto social, de los servicios públicos y sociales, especialmente los destinados a los sectores más desfavorecidos y más desatendidos de la población. Y entre ellos, entre los servicios públicos que se pretende recortar, ocupa un lugar destacado la educación, incluida la enseñanza superior, es decir, la universidad. O, mejor dicho, una determinada idea o concepción de la universidad: la de que ésta tiene como principal misión proveer una educación de calidad —y no sólo unos conocimientos técnicos para la capacitación profesional— al conjunto de la sociedad —y no sólo a los estudiantes de familias acomodadas o con recursos económicos suficientes, que pueden permitirse pagar unas altas tasas de matrícula y los costes de mantener a los hijos estudiando—, sino en particular a los sectores más desfavorecidos, con el fin de facilitar su integración no sólo laboral sino también social y cultural.

La educación ha sido a menudo una vía y un medio de promoción social y cultural, de superación de las barreras levantadas por la sangre y el dinero, como han destacado numerosos autores, desde Antonio Gramsci a Tony Judt, quien, poco antes de morir, hace unos meses, dedicaba el que quizá fuese su último artículo a entonar un canto fúnebre a la universidad basada en el mérito en la que se había educado y que le había permitido estudiar en Cambridge a pesar de proceder de una familia de clase trabajadora.⁸ La educación es también un poderoso instrumento de integración social y cultural de la población inmigrante en unas sociedades como las europeas cada vez más complejas y diversas culturalmente. Y, por supuesto, un requisito indispensable para la buena salud y el fortalecimiento del sustrato democrático de tales sociedades. Los déficits de cultura democrática —como los que sigue sufriendo la sociedad española más de treinta años después de restaurarse la democracia— no son sino, en última instancia, déficits culturales, educativos.

MALESTAR E INQUIETUD POR EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD

Las manifestaciones de estos días en Gran Bretaña —pero también la de estos últimos años en Francia, Alemania, Italia, España y otros países europeos— han puesto de relieve el malestar reinante en la comunidad universitaria y la inquietud por el futuro de la institución. Que no se limita a las dudas sobre la calidad de los mimbres con que se está urdiendo el Espacio Europeo de Educación Superior, aunque el proceso haya servido

de catalizador del descontento y haya atraído sobre sí, de manera un tanto injusta, la mayoría de las críticas. No hay duda de que necesitamos un espacio universitario común, europeo, porque la universidad es por definición universalista, trasciende –o ha de trascender– los estrictos marcos nacionales, no puede ser el campo de aplicación de la política educativa de los diferentes gobiernos nacionales –o autonómicos– y debe, por tanto, armonizar, al menos en el ámbito europeo, la normativa legal, el sistema de acceso, la estructura de los estudios, el contenido de las titulaciones, con el fin de facilitar la convalidación de los grados y, sobre todo, la movilidad de estudiantes y profesores. Al fin y al cabo, las universidades nacieron, hace más de ocho siglos, como realidades transnacionales, como corporaciones de maestros y estudiantes procedentes de diferentes países, y su riqueza radicaba precisamente en su universalidad y diversidad, mientras que su declive empezó y se acentuó con la pérdida de su autonomía y el intervencionismo cada vez mayor de los gobiernos (hasta llegar al control absoluto en el caso de la universidad franquista, la fascista o la stalinista). Pero persisten las dudas sobre la forma en que se está construyendo ese espacio educativo común y, de manera particular, sobre las intenciones últimas que la animan, es decir, sobre las razones reales de esta última reforma en la que estamos inmersos.

La principal preocupación expresada en las movilizaciones estudiantiles de los últimos años y en las críticas formuladas por los profesores se centra en la dimensión fundamentalmente económica con que se aborda la reforma de la universidad y en saber hasta qué punto intervendrán consideraciones mercantiles –hasta qué punto intervendrá el mercado– en la orientación e incluso en la concepción misma de la universidad. Profesores y estudiantes temen, en efecto, que la mercantilización de la universidad no se limite a la adopción de modelos empresariales de gestión –algo que ya viene sucediendo desde hace unos años y que lleva a algunos rectores a verse a sí mismos como empresarios o como presidentes de una empresa⁹ o a la participación cada vez mayor de los sectores económicos, a través de los consejos sociales, en los órganos de dirección y en la toma de decisiones, sino que se extienda incluso a la elaboración de los planes de estudio –es decir, a decidir qué es lo que se ha de enseñar, en función primordialmente, o exclusivamente, de la demanda, de criterios, por tanto, de rentabilidad económica inmediata y de satisfacción de las necesidades del mercado laboral– y a la orientación de la investigación –fundamentalmente aplicada, en detrimento de la básica, y vinculada a las necesidades y los intereses de la industria. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y la franqueza con que se expresan textos como el informe Browne, muestran que tales temores no están del todo injustificados.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y MERCADO LABORAL

Por su parte, muchos empresarios, políticos y amplios sectores de la población tienen serias dudas sobre el interés, la importancia y la utilidad de lo que se hace en la universidad. Para unos la universidad está fallando en lo que es y debería seguir siendo su primera y principal misión, la de formar profesionales cualificados para su inserción inmediata y adecuada en el sistema productivo. Para otros la enseñanza superior se ha extendido y devaluado tanto, que la universidad se ha convertido en una fábrica de parados. Si todo el mundo tiene un título universitario –de nuevo las reglas del mercado, la ley de la oferta y la demanda–, el título ya no sirve de mucho, ya no garantiza un puesto de trabajo. Ade-

9. Desde el momento que se ve la universidad como una empresa, incluso como una empresa pública, se pierde de vista su verdadera naturaleza institucional, educativa, social, cultural, «política», para poner en primer plano la cuenta de resultados, la rentabilidad económica. Y lo mismo ocurrirá con todos sus servicios, desde los educativos a los editoriales o los de extensión universitaria. La rentabilidad, sin embargo, no sólo se mide en términos económicos, sino también sociales, culturales, educativos... Lo que no significa que la universidad tenga que ser necesariamente deficitaria en términos económicos. Dependerá, lógicamente, de sus recursos financieros y también de la gestión de sus responsables.

10. José Manuel Pastor y Francisco Pérez, dirs., *La contribución socioeconómica de las universidades públicas valencianas*, Valencia, Universitat de València-IVIE, 2009, pág. 156. El informe también destaca que la tasa de paro de los universitarios valencianos pasó del 18 % en 1993 al 5,6 % en 2007, «un porcentaje que cabe considerar muy próximo al pleno empleo», pág. 25. Otro informe, elaborado por el OPAL (Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral) y hecho público

recientemente (19 noviembre 2010), eleva al 88,9 % el porcentaje de titulados de la Universidad de Valencia que encuentran empleo al poco de acabar sus estudios. Por áreas de conocimiento, los titulados en Ciencias de la Salud son quienes consiguen una mejor inserción laboral, seguidos por los de Ciencias de la Educación. El estudio está disponible en http://www.fguv.org/opal/Documentos/Presentacion_Resultados_EL_I_II_final.pdf.

11. Antoni Furió, «Entre l'oferta i la demanda: evolució de la matrícula i mercat de treball en història medieval», *Revista d'Història Medieval*, 2 (1991), págs. 227-248.

12. El informe *Salidas profesionales de los Estudios de Matemáticas. Análisis de la Inserción Laboral y Ofertas de Empleo*, elaborado por la Real Sociedad Matemática Española a instancias de la ANECA, presenta una perspectiva más que positiva sobre la ocupación profesional de los titulados en matemáticas: múltiples nichos de trabajo, mínimo desempleo, buenos salarios y una alta satisfacción laboral en un colectivo en el que el 52 % obtiene un empleo estable en menos de seis meses, y dos años después de finalizar los estudios, el índice de desempleo es tan sólo de un 5%, porcentaje que se reduce a un 1,8 % al cabo de cinco años, lo que supone una ocupación casi plena del 98,2 %. Por su parte, aunque la media de sueldo se encuentra entre los 30.000 y los 35.000 euros, más del 25 % tiene un salario superior a los 40.000 euros. El informe, de 2007, está disponible en www.rsmes.com/mis/prof/RSMES-ANECA.pdf.

13. Con todo, el Balance de Empleo mensual, elaborado por Infoempleo.com, en colaboración con Randstad, muestra que no sólo más del 70 % de las ofertas laborales van dirigidas a titulados universitarios, sino que las titulaciones más demandadas por los empleadores son, con diferencia, las licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas y en Económicas, seguidas por Ingeniería Industrial, Derecho y Medicina.

14. *Datos y cifras del sistema universitario. Curso 2008/2009*, Madrid, Ministerio de Educación, 2009. <https://www.educacion.es/dctm/mepysd/educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-generales/datos-generales-2008-09.pdf?documentId=0901e72b80048a78>.

15. Informe *Higher Education and adult learning. Education at a Glance 2009: OECD Indicators*, accesible online en http://www.oecd.org/document/24/0,3343,en_2649_39263_238_43586328_1_1_1_1,00.html.

más de clasistas e injustos, tales tópicos son falsos. Un informe sobre *La contribución socioeconómica de las universidades públicas valencianas*, de 2009, demuestra no sólo que la tasa de ocupación de los universitarios es elevada –alrededor del 83,1 % de los universitarios valencianos y el 85 % de los españoles están ocupados–, sino que la progresión al alza ha sido constante –diez puntos, del 75 % al 85 %, en trece años, de 1995 a 2007, para el conjunto de España.¹⁰ Tener estudios superiores no sólo sigue siendo, sino que cada vez lo es más, la forma –estadísticamente– más segura de obtener un empleo. Lo que no significa que todos los titulados universitarios lo obtengan, que lo obtengan enseguida o que lo obtengan en aquel campo profesional para el que se formaron o en el que se especializaron. La mayoría de los estudiantes que cursaron estudios de historia medieval en la Universidad de Valencia en los años en que existió esta especialidad –que difícilmente relacionaríamos con una pronta salida profesional– había encontrado empleo a los pocos años de obtener la licenciatura, y aunque, lógicamente, muy pocos pudieron incorporarse a la docencia y la investigación universitarias –la salida más acorde con unos estudios tan especializados–, más de la mitad de los que accedieron a una ocupación laboral lo hicieron en destinos relacionados de algún modo con el perfil de la licenciatura, ya fuese en el campo de la enseñanza secundaria o en archivos, centros de documentación, bibliotecas y museos.¹¹ Otras especialidades académicas igualmente minoritarias –es decir, de menor demanda estudiantil– y también aparentemente alejadas del mercado laboral, como es el caso de las matemáticas, consiguen mejores salidas profesionales para sus titulados –en porcentaje de ocupación y en niveles salariales–¹² que aquellas que, como es el caso de económicas y derecho, concentran la mayor parte de la demanda por estar, precisamente, más conectadas con el mercado de trabajo, pero cuyo desorbitado número de estudiantes juega en contra de su adecuada inserción en el mundo laboral.¹³

Sin embargo, muchos empresarios y políticos siguen pensando que lo que debe hacer la universidad es formar empresarios y letrados, capacitarlos profesionalmente y prepararlos adecuadamente para ser los futuros líderes del mundo político y económico. Preparar, en definitiva, a las elites económicas y políticas del mañana, porque, a pesar de todas las jeremiadas sobre la masificación de la universidad y el fracaso escolar, lo cierto es que la educación superior apenas llega a más de un tercio de la población en edad universitaria. En el curso 2008-2009 el número de estudiantes matriculados en universidades españolas se situaba en 1.389.394, un 37,2 % del total de 3.733.330 jóvenes en edad universitaria (entre 18 y 24 años).¹⁴ Pero si consideramos el total de titulados universitarios en relación con el total de la población adulta (entre 25 y 64 años), el porcentaje se reduce a un 20 %.¹⁵ La educación superior sigue siendo un bien valioso que facilita un mejor acceso al mercado laboral y a unos niveles salariales más altos. Y por ello, porque representa una inversión de futuro para los estudiantes que cursan estudios superiores, éstos deben pagar y asumir los costes de su propia educación. Y también por ello, porque la mayor cualificación profesional de los titulados redundará en beneficio del crecimiento económico y de la prosperidad general del país, sigue teniendo sentido la universidad. La defensa de las universidades en los últimos años se argumenta, incluso desde la administración pública y los propios sectores académicos (del informe Browne al del IVIE), con razonamientos primordialmente económicos.

¿Es ésta la principal función de la universidad hoy, la cualificación profesional, la formación especializada para atender las demandas del mercado laboral, como piensan muchos? ¿O la misión de la universidad va no sólo más allá de la conexión inmediata con el mercado del trabajo sino también más allá del ámbito estricto de la docencia? ¿La universidad es sólo enseñar, o también investigar y algo más, que diría Ortega? En todo caso, ¿tienen todavía sentido, en la sociedad postindustrial del siglo XXI, las universidades, una creación medieval con más de ochocientos años de existencia? Como es natural la respuesta dependerá de lo que entendamos por universidad, de lo que creamos que deben ser su sentido y función actuales y, sobre todo, de quien se haga la pregunta. Las universidades siguen siendo los principales centros de enseñanza superior en todo el mundo y también los principales centros de investigación en todas las áreas del conocimiento, especialmente en el ámbito de la investigación básica (sobre la que se constuye, no lo olvidemos, la investigación aplicada). La universidad cumple también una tercera función, que podríamos llamar social o cultural, e incluso cívica, que va desde la transferencia de resultados de la docencia y la investigación al papel de referente crítico que puede y debe asumir ante cuestiones que preocupan a la ciudadanía y para las que la universidad puede aportar, además de soluciones, ideas y propuestas fundamentadas y fomentar el debate público

No es una misión nueva, fruto de la politización de profesores y estudiantes, o que se haya desarrollado con la oposición universitaria al franquismo o con los movimientos estudiantiles de la segunda mitad del siglo XX, sino algo que ha caracterizado desde el principio a la universidad moderna y que ya reivindicaba en su día Ortega y Gasset: «La Universidad tiene que estar también abierta a la plena actualidad; más aún: tiene que estar en medio de ella, sumergida en ella. Y no digo esto sólo porque la excitación del aire libre histórico convenga a la Universidad, sino también, viceversa, porque la vida pública necesita urgentemente la intervención en ella de la Universidad como tal». La universidad ha de estar en medio de la sociedad y participar en el debate público, contribuir a la formación de la opinión pública. «*Para ello tiene la Universidad que intervenir en la actualidad como tal Universidad*, tratando los grandes temas del día desde su punto de vista propio –cultural, profesional o científico. De este modo no será una institución sólo para estudiantes, un recinto *ad usum delphinis*, sino que, metida en medio de la vida, de sus urgencias, de sus pasiones, ha de imponerse como un “poder espiritual” superior frente a la Prensa, representando la serenidad frente al frenesí, la seria agudeza frente a la frivolidad y la franca estupidez».¹⁶ Dejando a un lado la retórica propia de la época y del autor, pocos autores han expresado mejor esta doble relación de ida y vuelta entre la universidad y la sociedad, y no sólo con los estudiantes (los delfines). La sociedad y la vida pública necesitan a la universidad, necesitan sus servicios educativos y sus logros en el campo de la ciencia y la investigación, pero también necesitan su intervención pública, su posición crítica ante los retos y los problemas de nuestro tiempo. Pero, a su vez, también la universidad necesita de esta relación estrecha y permanente con la sociedad, para no quedar anquilosada, para no encerrarse displicente e irresponsablemente en su torre de marfil, para renovar constantemente su agenda de prioridades, para repensar continuamente su sentido y su función en el mundo actual.

Privarla de una u otra de estas tres funciones es atentar contra la idea misma de universidad, al menos de la universidad entendida como un bien público, como una apuesta

16. José Ortega y Gasset, *Misión de la Universidad*, Madrid, 1930.

de futuro válida también para el presente. Poner todo el énfasis en la docencia, y en particular en las titulaciones con mayor demanda estudiantil porque cuentan con mejores salidas profesionales, supone desatender una parte importantísima de la función educativa, que no es sólo técnica o especializada, y reducir las universidades a escuelas de capacitación profesional para el mercado laboral, a academias o centros de formación especializada para futuros empleados de alto nivel. Por importante y necesaria que sea la conexión entre la universidad y el tejido empresarial y productivo, por importantes y valiosos que sean los parques tecnológicos, las sociedades mixtas y las fundaciones conjuntas, los objetivos y las prioridades de una y otro son distintos. Hay que fomentar la colaboración fecunda entre ambos, pero sin supeditar la primera al segundo (máxime cuando es tan poco predecible el futuro profesional y el empleo, tal y como se reconoce al postular la formación a lo largo de la vida para compensar precisamente las necesidades de adaptación a las demandas laborales).

Por otra parte, una universidad sin investigación, y sin investigación básica, es un centro escolar o un laboratorio al servicio de la industria. Lo que, de hecho, ya ocurre en algunos países y en algunas áreas de conocimiento, en las que los proyectos de investigación son financiados y a menudo sugeridos y orientados por las propias empresas del sector. Y una universidad sin presencia activa en la vida pública es una universidad sumisa y obsequiosa con el poder, apagada, sin fuerza. No es, propiamente, una universidad, aunque en los últimos años hayan proliferado –con la anuencia o el estímulo del poder público– los establecimientos educativos con ese nombre, pero que no responden en absoluto a la idea de universidad como bien público.

CRÍTICAS DESDE FUERA Y DESDE DENTRO DE LA UNIVERSIDAD

Las críticas a la universidad, especialmente a su (mal) funcionamiento, suelen ser frecuentes, dentro y fuera de la propia universidad. En parte, porque es mucho lo que se espera de ella y en parte también, sin que esté en contradicción con lo anterior, porque no se sabe muy bien qué es o para qué sirve. De la universidad se espera sobre todo que ayude a construir un futuro mejor, y que lo haga abordando y ayudando a resolver los grandes problemas del presente, tanto mediante su contribución científica, ampliando los horizontes del conocimiento, como mediante la formación de profesionales cualificados. Un sentimiento que contrasta con la decepción e incluso la frustración de muchas familias que ven cómo el título universitario que habían soñado para sus hijos no les garantiza ningún porvenir laboral y se suman con amargura a los que piensan que la universidad no es más que una fábrica de parados; o con el desdén de muchos empresarios y políticos, que están convencidos de que la universidad, tal como está concebida actualmente, no está preparada para formar buenos profesionales, al insistir sobre todo en los aspectos teóricos –y poco útiles– del conocimiento, y que la verdadera enseñanza sólo empieza después, con la propia experiencia laboral o, en todo caso, con los másteres o los cursos de formación especializada, en los que se imparte un conocimiento más práctico y enfocado hacia la capacitación profesional.

Las críticas internas suelen incidir en los sistemas de reclutamiento y promoción del personal académico y –siempre desde la perspectiva del profesorado– en el crecimiento desmesurado del personal administrativo, de una burocracia excesiva y poco eficaz, y en

el mal funcionamiento de los servicios. Suelen avivarse especialmente con los casos más indecorosos de oposiciones amañadas que permiten entrever las prácticas clientelares y endogámicas que siguen caracterizando las relaciones (de poder) en el seno de los departamentos y que contribuyen a alimentar el descrédito de la universidad cada vez que saltan a la prensa. Pero también se centran en un sistema que descarga cada vez más las tareas docentes sobre un profesorado en precario y mal pagado (los asociados en España y los *assistants* en Estados Unidos), sin ninguna posibilidad de estabilización laboral a corto o largo plazo, porque su interés y utilidad radica precisamente en su condición de mano de obra barata e inestable, removible. Las críticas se suelen extender también a la insuficiencia de los recursos financieros y humanos, a la arbitrariedad o discrecionalidad de su distribución, a la falta de instalaciones y equipamiento adecuados, a la proliferación de cargos académicos o, por el contrario, a lo mal retribuidos que están, a la excesiva carga docente, a la progresiva pérdida de capacidad adquisitiva de unas nóminas estancadas o menguantes, a un sueldo base raquítrico que delata su exigüidad al llegar la jubilación y desaparecer todos los complementos salariales que lo adecentan hasta entonces... Por su parte, el personal de administración y servicios, además de sus protestas estrictamente laborales sobre la promoción en la escala salarial o la gestión del control horario, se queja con razón de su todavía escasa participación en los órganos de dirección y en la toma de decisiones, de no ser considerados universitarios a todos los efectos, como lo son los profesores y los estudiantes, cuando también son trabajadores y miembros de pleno derecho de la comunidad universitaria y, en muchos casos, ejercen funciones de gran responsabilidad o muy especializadas.

Las críticas más radicales y, a menudo, más fundamentadas, sin que ello implique que las anteriores no lo estén, vienen de los propios estudiantes, quienes a pesar de lo transitorio de su paso por la universidad, de acabar de llegar y estar ya a punto de irse, ven a veces con mucha mayor claridad las amenazas que se ciernen sobre la institución. Las protestas de los estudiantes –en Londres, pero también en París, Barcelona o Valencia hace un año– son radicales no tanto por las formas en que se expresan –incluidas las violentas, absolutamente injustificables– sino porque van a la raíz del problema. Y el problema está en los planes de estudio y en lo que se espera o se pretende de la universidad. Los estudiantes no se han movilizad sólo, o principalmente, porque aumenten las tasas de matrícula –en Gran Bretaña es todavía una previsión del gobierno, pero en España es ya una realidad, especialmente por lo que se refiere a los estudios de posgrado–, sino en contra de lo que consideran una progresiva mercantilización de la universidad, tanto por supeditar sus funciones educativas e investigadoras a las necesidades del mercado y las exigencias de las empresas, como por incorporar modelos de gestión del mundo empresarial.

En realidad, las críticas a la universidad, desde fuera y desde dentro, son casi tan antiguas como la propia institución. Los poderes siempre han desconfiado de una entidad que nació fuera de su control, a iniciativa de los propios maestros y estudiantes y con sus propias normas de funcionamiento interno, y desde el principio trataron de disciplinarla y de someterla a la autoridad de la Iglesia o del Estado, o de ambos a la vez, mediante el monopolio de la concesión de los grados académicos, la promulgación de constituciones y estatutos de obligado cumplimiento y el nombramiento de los principales cargos y aun, en algunos casos, de los propios catedráticos. La universidad,

en consecuencia, ha sido durante mucho tiempo el vivero de servidores de la Iglesia y del Estado, el lugar donde se han formado históricamente los técnicos y burócratas de la administración laica y eclesiástica y, también, desde donde papas y reyes han recibido el apoyo ideológico de los doctores en teología y en derecho. Pero también el semillero donde han fermentado y madurado las ideas heréticas, subversivas, a contracorriente, revolucionarias, desde John Wycliffe y Jan Hus en los siglos XIV y XV a la universidad antifranquista, las revueltas estudiantiles de los años sesenta en Europa, Estados Unidos y México y las protestas de la Plaza de Tiananmen en 1989. Wycliffe fue profesor en Oxford, donde unos años más tarde el obispo de Lincoln fundó un colegio (Lincoln College) con el propósito especial de formar teólogos que combatiesen las ideas heréticas de aquél; el mismo obispo, honrado como benefactor de la universidad, mandó desenterrar el cuerpo de Wycliffe y, cumpliendo las órdenes del concilio de Constanza, quemó los huesos y arrojó las cenizas al río.

La universidad ha sido al mismo tiempo la sede de la ortodoxia y el refugio de la heterodoxia, la cuna del dogma y de la herejía. Y en buena medida el conocimiento científico ha avanzado combatiendo contra la universidad, contra el saber establecido, estéril y anquilosado, que anidaba en la universidad. Un combate que tenía lugar en la propia universidad o en sus alrededores, en las sociedades y academias científicas que fueron surgiendo a su alrededor. Las sucesivas reformas impuestas a la universidad han sido con frecuencia intentos desde fuera, desde el poder eclesiástico primero y el laico después, por devolverla al redil, por tutelar y encauzar adecuadamente su funcionamiento, las ideas y los procesos que se desarrollan en su interior. Tal vez por eso ningún gobierno se ha creído nunca seriamente lo de la autonomía universitaria, que supondría la renuncia a esa tutela permanente, y prácticamente todo ejecutivo que se precie ha emprendido o ha intentado emprender alguna reforma de la universidad, que por lo general no ha sido sino una vuelta de tuerca más en la sujeción de la universidad y la antesala de la siguiente reforma. Dejando piadosamente atrás en la memoria alguna reforma tan pintoresca y disparatada como la de aquel ministro franquista, y hasta entonces rector de la Universidad Autónoma de Madrid, que propuso cambiar el calendario académico para hacerlo coincidir con el año natural, de enero a diciembre, y que sólo duró seis meses en el cargo, las sucesivas reformas promovidas tras la llegada de la democracia no sólo han enterrado muchas de las esperanzas levantadas en los años sesenta y setenta sobre el futuro de la universidad en España, sino que han abierto la vía a muchos de los males que aquejan hoy a la institución, empezando por su sumisión a los poderes políticos y siguiendo por su progresiva supeditación a las necesidades e intereses del mercado. En efecto, la autonomía universitaria por la que habían luchado estudiantes y profesores, al entender que es la esencia misma de la universidad, al final consistió en transferir las competencias sobre las universidades a los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la sartén por el mango no sólo en materia de financiación, sino también en la aprobación de las titulaciones, en la creación de nuevas universidades e incluso en la desmembración de las antiguas, si así pueden debilitar a las ariscas y asegurarse otras más adictas. Por otra parte, al privilegiar el número de estudiantes como único parámetro a la hora de distribuir los fondos públicos entre las distintas universidades, ignorando otros criterios como la producción científica, los gobiernos autonómicos han estado optando claramente

por un modelo de universidad basado en la cantidad más que en la calidad, y orientado más hacia la docencia que hacia la investigación, a pesar de toda la palabrería en favor de la excelencia universitaria.

Hoy estamos inmersos en una reforma que afectará profundamente a la naturaleza y la función de la universidad. Hasta ahora cada nueva reforma instada desde el gobierno ha sido recibida con escepticismo por los universitarios, que, excepto en el caso de algunos pocos entusiastas, se han limitado a esperar la reforma de la reforma. Y a menudo el tiempo les ha dado la razón. Esta vez es diferente, porque el envite es mayor, afecta a toda Europa e implica a muchos más actores, no sólo políticos y académicos, sino también económicos y sociales. La universidad del siglo XXI dependerá en buena medida de cómo se implante y desarrolle el proceso de Bolonia, que hasta el momento sigue siendo más una declaración de buenas intenciones, cuya interpretación depende de los diferentes gobiernos nacionales, que una hoja de ruta cerrada y detallada.

«La reforma universitaria», decía Ortega hace ochenta años, en un momento también decisivo para el futuro de la universidad española, «no puede reducirse, ni siquiera consistir principalmente, a la corrección de abusos». Al fin y al cabo, los abusos tienen siempre escasa importancia, son por definición casos aislados o poco frecuentes. «La raíz de la reforma universitaria está en acertar plenamente con su misión». No se trata, por tanto, de corregir abusos o de practicar meros apaños, sino de acertar con lo que se pretende que sea la universidad. Es esto, y no el sistema de reclutamiento y promoción, la financiación o los planes de estudio, lo que realmente está en juego.

SENTIDO Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD

Durante mucho tiempo, durante la mayor parte de sus ya más de ocho siglos de existencia, la universidad tuvo una función primordialmente educativa, como centro de transmisión del conocimiento. En las edades medieval y moderna la universidad era, y se percibía a sí misma, como un templo del saber, de los saberes acumulados en las diferentes disciplinas, y una escuela de formación de técnicos, como apuntaba anteriormente, al servicio de la Iglesia (teólogos, doctores en derecho canónico) y del Estado (juristas, jueces, abogados), en la que a duras penas podían progresar la medicina (todavía muy poco experimental) y la filosofía (muy poco crítica y supeditada a la fe y la razón escolásticas). En el siglo XIX Alemania «reinventó» la universidad al asignarle una nueva misión: la producción –y ya no sólo la transmisión– de nuevos conocimientos, de nuevos saberes, es decir, la investigación. Desde entonces, docencia e investigación han sido los dos pilares sobre los que se ha sustentado el concepto moderno de universidad, si bien es cierto que en España se ha tardado bastante más en asumirlo y nuestras universidades han tenido que hacer un importante esfuerzo, no siempre con los apoyos necesarios, por corregir el retraso científico y tecnológico y reducir la distancia que nos separaba de las universidades europeas.

El siglo XXI incorpora –o mejor aún, potencia y exige– una tercera misión de la universidad. La que se ha convenido en llamar transferencia –pero que igualmente se podría haber llamado función social, cultural, cívica, económica–, y que no consiste en otra cosa que en devolver, multiplicada, la inversión que la sociedad ha hecho en la universidad. La transferencia se mide, entre otros aspectos, en patentes, en tecnologías, en producción

científica, en resultados de la investigación, pero también en otros muchos parámetros, materiales e inmateriales. En la formación de titulados y doctores, en tesis doctorales, en informes y estudios, en publicaciones, en conferencias, en exposiciones, en cursos de extensión universitaria, en declaraciones y actitudes, en colaboración con los poderes públicos y la sociedad civil, con los empresarios y los sectores económicos, en conexión con el mercado de trabajo y el tejido productivo, en investigación, desarrollo e innovación.

La universidad es una institución con una larga tradición histórica y, al mismo tiempo, una realidad moderna, viva, actual. Es en la universidad donde se abordan y se intenta dar respuestas y soluciones a los grandes retos y problemas de nuestro tiempo. Retos y problemas complejos como la mejora de la salud y la educación, la reducción de la pobreza y el incremento del bienestar, la convivencia interétnica y multicultural, la sostenibilidad y la calidad ambiental, la igualdad... Es en la universidad donde se investiga sobre células madre y donde se hacen cada día avances considerables en el campo de la medicina y la salud y del conocimiento científico en general; donde se estudian las causas de la pobreza y la desigualdad; donde se trata la complejidad de las sociedades modernas, posindustriales, y los problemas asociados a la integración de poblaciones muy heterogéneas; donde se forman profesionales cualificados y competentes para su incorporación al mundo del trabajo; donde se educa en valores, y no sólo en conocimiento, donde se forman ciudadanos críticos y conscientes. Es en la universidad donde se construye cada día el futuro.

Una parte muy importante de lo que está en juego es si todo lo que aporta la universidad al conjunto de la sociedad lo hace en tanto que institución pública o como empresa privada. Y, en consecuencia, si es un servicio público, un beneficio público, o debe cobrar por ello. Si la educación y la producción científica y tecnológica siguen siendo un bien público o se convierten también en mercancías. Porque de la respuesta a estas cuestiones dependerá que las universidades se inclinen más por una dimensión práctica y utilitaria, poniendo el acento en la cualificación profesional y la investigación aplicada para atender las necesidades inmediatas del mercado laboral y de la industria, o sigan siendo instituciones educativas en el sentido más amplio del término. Es decir, que no sólo eduquen en conocimientos sino también en valores. La universidad es un lugar para atreverse a pensar, como recomendaba Kant, para enseñar a pensar (y esta es la esencia de la educación universitaria) y para transmitir y crear nuevos conocimientos, para ampliar el pensamiento. Como decía la rectora de la Universidad de Harvard en un artículo sobre la crisis de sentido de la universidad, de las universidades se espera que sean productoras no sólo de conocimiento, sino también de duda (a menudo inconveniente). Son lugares creativos y rebeldes, hogares de una polifonía de voces, una de cuyas principales funciones consiste en crear y cuestionar valores. Su utilidad no se mide por sus beneficios a corto plazo, inmediatos, sino por su visión a más largo plazo y sus perspectivas críticas que miran más allá del presente. Las universidades, concluye, tienen la responsabilidad de servir no sólo como fuente de crecimiento económico [por su contribución a la cualificación profesional y a la investigación e innovación tecnológica], sino también como conciencia crítica de la sociedad.¹⁷

La universidad como conciencia crítica –en boca no de profesores y estudiantes revolucionarios de los años sesenta, sino de la rectora de una de las universidades más prestigiosas y elitistas de los Estados Unidos– no es incompatible con la colaboración de la

17. Drew Gilpin Faust, «The University's Crisis of Purpose», *The New York Times*, 6 de septiembre de 2009. <http://www.nytimes.com/2009/09/06/books/review/Faust-t.html?pagewanted=all>.

universidad con el tejido productivo y empresarial, con la contribución de la educación superior a la economía del conocimiento y a la creación de riqueza, a la innovación tecnológica y el desarrollo económico. Pero sí lo es con la mercantilización de las funciones esenciales de la universidad: educativas, investigadoras y de servicios. La mercantilización de la universidad acabará con las dudas y los valores –al menos los valores heterodoxos, los que cuestionen la preeminencia del mercado y la bondad del sistema– y con cualquier conciencia crítica, ya que se basa en la fe ciega en las leyes del mercado como fuente de toda racionalidad y eficiencia.

No es cierto que no haya más salida que la mercantilización de la universidad, que la subordinación de los planes de estudio y de la investigación científica y tecnológica a las necesidades, intereses y oportunidades del mercado y de la industria, para garantizar el futuro de la universidad. Sí es cierto que, sin una financiación suficiente y estable, no puede haber universidad de calidad. La docencia de calidad y la investigación de excelencia, que es lo que la sociedad y los poderes públicos demandan a la universidad, necesitan dinero, mucho dinero. Necesitan, sobre todo, un nuevo plan de financiación que no se base, como el actual, en el número de estudiantes, y que tenga en cuenta también otras variables además de la producción científica y la transferencia tecnológica, variables que corren peligro con la forma actual de cuantificar la rentabilidad, sólo en términos económicos –cuando la rentabilidad de la universidad ha de medirse también en términos sociales, culturales, educativos–, así como la convicción, por parte de las administraciones públicas, de que invertir en universidad es invertir en futuro. Un modelo económico como el actual tiene efectos perversos, devastadores, para cualquier proyecto de universidad de calidad. Al basar la financiación en el número de estudiantes se apuesta directamente por la masificación, por el incremento a toda costa del número de matrículas. Es así como algunos centros han crecido desorbitadamente en los últimos años, por encima de sus capacidades y recursos. ¿Cómo atender un número tan alto de estudiantes, como poner en marcha la innovación educativa, los grupos reducidos, las tutorías, con un número insuficiente de profesores? Las universidades no pueden dejar de acoger al máximo número de estudiantes posible, porque perderían recursos financieros, pero luego son incapaces de atenderlos adecuadamente. Y es entonces cuando se generan los desequilibrios y las frustraciones, la competencia entre los centros por plazas y dotaciones, la discusión sobre si deben primar las necesidades docentes o las de investigación, la dificultad para incorporar jóvenes investigadores y docentes a la plantilla de los departamentos, la contratación de asociados mileuristas, la oferta de másteres y cursos de posgrado vistosos y poco exigentes con el fin de atraer estudiantes, el hecho de que la aplicación a la docencia de las nuevas tecnologías (las llamadas, de forma un tanto pomposa, tecnologías de la información y el conocimiento) se reduzca a menudo a colgar los apuntes en el aula virtual o a pasar un powerpoint ramplón a una clase abarrotada... Todo lo cual ha acabado por provocar el cansancio y la desmoralización de buena parte del profesorado y ha dejado las universidades en manos de los tecnócratas que hoy las gobiernan. La consigna en todos los ámbitos de la administración académica es el cortoplacismo, las soluciones puntuales, el pan para hoy..., sin mayor horizonte ni ambición que gestionar el día a día –lo cual no es poco– y dejar que los problemas de fondo, estructurales, se estanquen y perpetúen.

El futuro de la universidad es incierto, y visto lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, quizá haya más razones para el pesimismo que para el optimismo. La autonomía universitaria siempre ha sido una quimera. Las universidades han dependido hasta ahora de los gobiernos y es probable que en el futuro pasen a depender de los mercados. Al fin y al cabo, resulta difícil situarse fuera de la lógica y la racionalidad del sistema económico y social imperante. Pero sometiendo la universidad a las normas, las leyes, las necesidades y los intereses del mercado, los gobiernos y los mercados podrían acabar con ella. Sin libertad para pensar y para pensar sin urgencias, para investigar sin someterse a la tiranía de los resultados inmediatos, prácticos, no hay creación ni innovación. La ciencia necesita unos horizontes más amplios y más a largo plazo que la investigación aplicada o el desarrollo tecnológico. Pero también los necesita la educación y la cualificación profesional, so pena de esclerotizarse en unos conocimientos técnicos someros y estereotipados. Educación, ciencia y cultura conviven y se retroalimentan mutuamente en la universidad. La mercantilización de la universidad –la conversión del conocimiento y la producción científica en mercancía, la separación de sus funciones, ahora tan inextricablemente unidas– sería el fin de la universidad. Serían otra cosa, empresas de conocimiento, academias de formación especializada, laboratorios de investigación, pero no universidades. Uno espera que, como en otros momentos de su historia, las universidades sepan reinventarse, sepan y puedan preservar, a pesar de las presiones ambientales, ese recinto de libertad de pensamiento, esa capacidad de atreverse a pensar, de mirar críticamente hacia fuera y hacia dentro, que constituye su esencia y su virtud más preciada. La universidad seguirá siendo universidad mientras siga siendo conciencia crítica de nuestro tiempo. ■